



## RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 079-2013 – GR-JUNÍN/PR


Huancayo, 14 FEB. 2013

### EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN


#### VISTO:

El Informe Legal No 080-2013-GRJ/ORAJ, de fecha 07 de febrero del 2013 y Reporte N° 011-2013-GRJ-ORAF, con fecha de recepción del 24 de enero de 2013, que contiene el recurso impugnatorio de reconsideración contra la Resolución Directoral Administrativa N° 774-2012-GR-JUNÍN/ORAF, de fecha 28 de diciembre de 2012, interpuesto por la administrada **Maritza Rocío Cotera Barja**;

#### CONSIDERANDO:



Que, atendiendo a la recomendación del Comité Especial de Procesos Administrativos del Gobierno Regional de Junín, contenida en el Informe Técnico N° 051-2012-GRJ-CEPAD, de fecha 23 de noviembre del 2012, mediante Resolución Directoral Administrativa N° 674-2012-GR-JUNIN/ORAF de fecha 23 de noviembre del 2012, se apertura proceso administrativo disciplinario a la ex Sub Gerente de Desarrollo de Satipo, Sra. MARITZA ROCIO COTERA BARJA a quien se le imputa, que ha incurrido en presuntas faltas de carácter administrativo tipificado como Incumplimiento de las normas establecidas en el D. Leg. N° 276 y su reglamento.



Que, se le atribuye haber propiciado y permitido el pago de los haberes correspondientes a los meses de abril y mayo del 2012 de los servidores CAS Eusebio Cirilo Aliaga Santos y Max Alejandro Baldeon Pérez, sin embargo dichos ex trabajadores no habrían laborado en el periodo antes indicado; así la Defensoría del Pueblo, efectúa una visita inopinada a la Sub Gerencia de Desarrollo de Satipo el 07 de junio del 2012, para verificar la asistencia de los servidores CAS antes mencionados y no los ubica en sus puestos de trabajo. Según lo manifestado por el Informe Legal N° 570-2012-GRJ/ORAJ, de fecha 02 de julio del 2012, después de la constatación efectuada por la Defensoría del Pueblo el 07 de junio del 2012, la Sub Gerente de Desarrollo de Satipo ordena la anulación de los cheques de los servidores, sin motivo alguno, puesto que en las Oficinas de la Sub Gerencia de Desarrollo de Satipo son pequeñas y sus servidores no superan la decena, por lo que no tiene explicación lógica que la citada ex funcionaria ordene la anulación del pago, si tenía la certeza y le constaba que ambos servidores CAS habían prestado sus servicios. Estos hechos generan que la Sra. MARITZA ROCIO COTERA BARJA, ex Sub Gerente de Desarrollo de Satipo, habría incurrido en presunta falta de carácter administrativo disciplinario tipificado en el Inc. a) y h) del Art. 28° del D. Leg. N°

PRESIDENCIA	
DOC. N°	256422
EXP. N°	164530





Presidencia



276, donde dice: "Son faltas de carácter disciplinario a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley su reglamento. h) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de lucro".

Que, con fecha 30 de noviembre del 2012, la citada procesada, cumple con presentar sus descargos, por lo que con fecha 26 de diciembre del 2012, la Comisión Especial de Procesos Administrativos emite el Informe Técnico N° 057-2012-GRJ-CEPAD, mediante el cual recomienda la imposición de una sanción de cese temporal sin goce de remuneraciones.

Que, mediante Resolución Directoral Administrativa N° 774-2012-GR-JUNIN/ORAF, de fecha 28 de Diciembre del 2012, se resuelve en su artículo primero: "IMPONER la medida disciplinaria de suspensión sin goce de remuneraciones por treinta días a doña MARITZA ROCIO COTERA BARJA, ex Sub Gerente de Desarrollo de Satipo por haber incurrido en faltas de carácter administrativo disciplinario(...) el cual se encuentra tipificado como Incumplimiento de las Normas Establecidas (...) en el inciso a) y h) del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276(...)".

Que, mediante escrito, con fecha de recepción 18 de enero del 2013, la sancionada ex servidora Sra. MARITZA ROCIO COTERA BARJA, interpone recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral Administrativa N° 774-2012-GR-JUNIN/ORAF, de fecha 28 de Diciembre del 2012.

Que, a través del Reporte N° 011-2013-GRJ-ORAF, el Director Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional Junín remite el recurso de reconsideración presentado al despacho de la Presidencia del Gobierno Regional.

**Sobre la Competencia de la Presidencia del Gobierno Regional de Junín para resolver el presente recurso impugnatorio.-**

Que, antes de analizar el fondo de la controversia, debe evaluarse la competencia para resolver el recurso planteado, por cuanto, conforme se tiene de la Resolución Ejecutiva Regional N° 495-2011-GR-JUNIN/PR de fecha 22 de noviembre del 2012, aplicando el artículo 74° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444; el Presidente del Gobierno Regional Junín ha delegado facultades y atribuciones entre otros, al Director Regional de Administración y Finanzas para imponer a propuesta de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, las sanciones o absoluciones a las que hubiere lugar, por lo tanto, al imponer el Director Regional de Administración y Finanzas sanciones disciplinarias, ha actuado conforme a las facultades conferidas y antes detalladas; sin embargo, a tenor de lo establecido en el numeral 74.4 del art. 74° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, quien debe resolver la impugnación contra actos administrativos emitidos en ejercicio de competencia desconcentrada, **corresponderá resolver a quien haya transferido**, salvo disposición legal distinta.

Que, por lo manifestado, en el presente caso corresponde resolver el recurso planteado al Presidente del Gobierno Regional Junín, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 74°, *desconcentración* significa asignar la competencia de un órgano a otro jerárquicamente dependiente de éste, ya que







Presidencia



*Trabajando con la fuerza del pueblo!*

permite que los órganos de dirección se aparten de la rutina ejecutiva, de emitir comunicaciones ordinarias y de la formalización de actos administrativos, a fin de que dediquen plenamente a tareas más importantes: planeamiento, supervisión, coordinación, etc.; manteniendo la facultad de resolver las impugnaciones de los actos administrativos dictados por el órgano desconcentrado.

Que, finalmente, debe establecerse para resolver los recursos planteados por el impugnante, que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal conforme se encuentra establecido en el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867.

Que, el Pliego del Gobierno Regional Junín, constituye única instancia, por lo que en aplicación del art. 208 de la citada Ley N° 27444, los recursos impugnatorios contra sus actos administrativos, admiten sólo la interposición del recurso reconsideración, el que no requiere nueva prueba.

#### **Sobre el Recurso de Reconsideración.-**

Que, conforme a lo establecido por el art. 206 de la Ley N° 27444, frente a un acto administrativo que viola, desconoce, o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa, lo que debe concordarse con el art. 208 del mismo cuerpo legal que establece, que el recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba.



Que, asimismo, que como requisito para la presentación de recurso de impugnación se tiene que el plazo máximo para presentarlo es de 15 días perentorios. La recurrente ha presentado su recurso de apelación el día 18 de enero del 2013; además ha adjuntado constancia de notificación N° 012-2013-GRJ/CPPAD, en la que se muestra que ha recibido la resolución en mención el día 07 de enero del 2013, cumpliendo con el requisito exigido por la norma administrativa.

#### **Sobre los argumentos de descargo de la impugnante.-**

Que, en el escrito que contiene el recurso de reconsideración en mención, la recurrente afirma que la Resolución Directoral Administrativa N° 580-2012-GR-JUNIN/ORAF, la sanciona por haber pagado indebidamente a 02 ex servidores en el mes de abril del 2012, sin embargo aquellos, contaban con sus correspondientes prórrogas a sus contratos CAS, suscritos por la Oficina Regional de Administración y Finanzas, por ello, estos ex servidores no pueden negar la validez de éstas adendas, pues el principio de presunción de la veracidad, así lo exige. Igualmente acota, que el reporte de asistencias remitido para su pago, se debió a que ya obraba un control de asistencia, admitiendo la comisión de un error por ello, e inducido por la Administración de la Sub Gerencia de Desarrollo Satipo bajo cuya responsabilidad se encontraba el control de las asistencias del personal CAS.







Presidencia



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

Que, continúa la impugnante señalando que las simples afirmaciones de los ex servidores no tienen sustento probatorio y no es suficiente para aprobar su responsabilidad, admitiendo que incurrió en error al remitir un reporte de asistencia que no reflejaba la verdad, por lo que al no ser su conducta deliberada ni dolosa, se acoge a la causal de exclusión de responsabilidad del art. 236-A de la Ley N° 27444, consecuentemente no existe culpabilidad.

Que, afirma la impugnante que no existen pruebas sobre la complicidad existente con el administrador de la Sub Gerencia, pues era función de aquel el control de la asistencia de personal; aclarando que todo trámite de pago de remuneraciones corresponde a la oficina de administración, estando acreditado que era el administrador quien utilizaba los recibos de honorarios de terceras personas. Ello se ve confirmado con la declaración jurada de la Sra. Lizbeth Diana Díaz Acosta que acredita que el referido administrador le facilitó recibos por honorarios profesionales para pagarle la remuneración del mes de abril del 2012.

Que, por lo manifestado, concluye que en atención al principio de licitud o inocencia previsto en el numeral 9 del art. 230 de la Ley N° 27444, al no haberse probado su responsabilidad por haberse efectuado una investigación insuficiente, debe ser absuelta.

#### **Sobre la responsabilidad administrativa de la apelante.-**

Que, se tiene que a través del Contrato Administrativo de Servicios N° 007-2012-GRJ/ORAF, se contrata al Sr. EUSEBIO CIRILO ALIAGA SANTOS, como personal de servicio – guardianía y limpieza en la Sub Gerencia de Desarrollo de Satipo, por el plazo comprendido entre el 03 de febrero al 31 de marzo del 2012 con una remuneración de S/. 700.00 nuevos soles mensuales. Este contrato fue ampliado en su plazo de vigencia al 30 de junio del 2012. Igualmente, por un Contrato similar N° 170-2012-GRJ/ORAF, se contrata al Sr. MAX ALEJANDRO BALDEON PEREZ, como chofer en la Sub Gerencia de Desarrollo de Satipo, entre el 08 de agosto al 31 de setiembre del 2011 con una remuneración de S/. 900.00 nuevos soles mensuales. Este contrato fue ampliado sucesivamente en su plazo de vigencia al 30 de junio del 2012.

Que, el ex servidor MAX ALEJANDRO BALDEON PEREZ, mediante Informe N° 018-2011-GRJ/SGDS-MABP del 16 de abril del 2012, informa sobre sus actividades correspondientes al mes de **abril** 2012, documento que merece la conformidad del administrador de la Sub Gerencia, Sr. Milquiades Sánchez Inga, mediante el Reporte N° 037-2012-GRJ-SGDS/MSI, de fecha 18 de abril del 2012. En el caso del ex servidor EUSEBIO CIRILO ALIAGA SANTOS, mediante Informe N° 05-2012-GRJ/SGDS-ECAS del 16 de abril del 2012, informa sobre sus actividades correspondientes al mes de **abril** 2012, documento que merece la conformidad del administrador de la SGDS, Sr. Milquiades Sánchez Inga, mediante el Reporte N° 038-2012-GRJ-SGDS/MSI, de fecha 18 de abril del 2012.

Que, con fecha 03 de mayo del 2012 y con Memorando N° 096-2012-GRJ-SGDS, la impugnante, Sra. Maritza Rocio Cotera Barja; remite las tarjeta de asistencia correspondiente al mes de **abril** del 2012 de los referidos servidores CAS, lo que se condice con el Memorando N° 089-2012-GRJ-SGDS del 18 de







Presidencia



abril del 2012, de la misma funcionaria que adjunta los informes y conformidades a los servicios prestados.

Que, posteriormente, el ex servidor MAX ALEJANDRO BALDEON PEREZ, mediante Informe N° 020-2011-GRJ/SGDS-MABP del 16 de mayo del 2012, informa sobre sus actividades correspondientes al mes de **mayo** 2012, documento que merece la conformidad del administrador de la SGDS, Sr. Milquiades Sánchez Inga, mediante el Reporte N° 043-2012-GRJ-SGDS/MSI, de fecha 16 de mayo del 2012. Igualmente, el ex servidor EUSEBIO CIRILO ALIAGA SANTOS, mediante Informe N° 05-2012-GRJ/SGDS-ECAS, del 16 de mayo del 2012, informa sobre sus actividades correspondientes al mismo mes, documento que cuenta con el visto bueno del administrador de la SGDS, Sr. Milquiades Sánchez Inga, mediante el Reporte N° 042-2012-GRJ-SGDS/MSI, de fecha 16 de mayo del 2012.

Que, igualmente, con Memorando N° 131-2012-GRJ-SGDS, del 04 de Junio del 2012, la impugnante; remite las tarjeta de asistencia correspondiente al mes de **mayo** del 2012 de los referidos servidores CAS, lo que se condice con el memorando N° 111-2012-GRJ-SGDS del 18 de abril del 2012, de la misma funcionario que adjunta los informes y conformidades a los servicios prestados.

Que, mediante el Reporte N° 483-2012-GR-JUNIN-ORAF-OAF/CT, de fecha 28 de junio del 2012, de la Coordinación de Tesorería del Gobierno Regional de Junín, se informa que los cheques de los antes mencionados ex servidores, correspondientes al mes de abril del 2012, fueron remitidos por mesa de partes a la Sub Gerencia de Satipo para su pago, recepcionándose los cargos emitidos por el encargado de administración de dicha dependencia Sr. Melquiades Sánchez Inga. En relacionado a los cheques del mes de **mayo**, estos fueron entregados personalmente a impugnante en caja de la sede central del Gobierno Regional de Junín, planilla no devuelta hasta la fecha.

Que, al respecto, con el Reporte N° 226-2012-GRJ/SGDS, del **08 de junio del 2012**, la antes mencionada Sub Gerente solicita a la Gerencia General Regional la anulación de los cheques N° 67501219 9 018 381 9381042928 46 por la suma de S/. 783.00 nuevos soles, a nombre de Max Alejandro Baldeón Perez y N° 67501246 2 018 381 0381042928 46 por la suma de S/. 609.00 nuevos soles, a nombre de Aliaga Santos Eusebio Cirilo; por no corresponder. El Coordinador de Tesorería CPC Raúl Quispe Limaylla, mediante el Reporte N° 454-2012-GR-JUNIN-ORAF-OAF/CT, del 14 de junio solicita se le informe sobre los motivos por los cuales se le solicita la anulación de los cheques.

Que, debe evidenciarse que, con fecha **07 de junio del 2012** la Defensoría del Pueblo de Satipo, concurrió a la sede de la Sub Gerencia de Desarrollo de Satipo, verificando que los servidores CAS EUSEBIO CIRILO ALIAGA SANTOS y MAX ALEJANDRO BALDEON PEREZ no se encuentran laborando y sus tarjetas de asistencia del mes de junio se encuentran en blanco. Igualmente que el primero de los nombrados laboró sólo hasta el mes de febrero del 2012 y el segundo hasta el mes de marzo del mismo año. Igualmente en el libro de registro de ingreso de documentos, se verifica que el Sr. EUSEBIO CIRILO







ALIAGA SANTOS presentó el día 14 de marzo del 2012 un documento que tiene como sumilla "Renuncia a cargo de Conserje".

Que, el ex servidor EUSEBIO CIRILO ALIAGA SANTOS, mediante Reporte N° 001-2012-GRJ-SGRS/EAS, del 03 de abril del 2012, ratifica su renuncia presentada con Carta N° 01-2012-EAS, al cargo de guardián y conserje, debido a que debe continuar sus estudios en el ISTP Teodoro Rivera Taipe, por lo que hace entrega de las llaves de la entidad. Con Reporte N° 002-2012-GRJ-SGRS/EAS, del 04 de abril del 2012, solicita reconsideración a su denuncia, dadas las facilidades que se le brindarán.

Que, posteriormente, con Reporte N° 001-2012-GRJ-SGRS/EAS, del 31 de mayo del 2012, solicita permiso por el período de 25 días, por tener que realizar trabajos propios de sus estudios superiores.

Que, con referencia al ex servidor MAX ALEJANDRO BALDEON PEREZ, con Reporte N° 05-2012-GRJ-SGDS/MABP del 31 de mayo del 2012, solicita permiso por motivos particulares desde el 01 al 11 de junio del 2012, ampliando dicho permiso hasta el 22 del mismo mes y año con Reporte N° 06-2012-GRJ-SGDS/MABP del 11 de junio del 2012, petición denegada y notificada el mismo día.

Que, es de resaltar el hecho que, con fecha 25 de Junio del 2012, el servidor de la Sub Gerencia de Desarrollo Satipo, Ing. Zósimo Elescano Bernardo, mediante declaración escrita, hace conocer que los servidores EUSEBIO CIRILO ALIAGA SANTOS y MAX ALEJANDRO BALDEON PEREZ, **NO PRESTARON SUS SERVICIOS NI ASISTIERON A LABORAR** en los meses de abril y mayo del 2012 y que sus tarjetas de asistencia, siempre estuvieron en el tablero correspondiente, en blanco y sin firmar. Debe aunarse a lo manifestado que ante el requerimiento de información efectuada por la Gerencia General Regional, la que mediante el oficio N° 690-2012-GRJ/GGR solicita a la Dirección del Instituto Tecnológico Superior Público Teodoro Rivera Taype de Satipo, un informe sobre la asistencia diaria del alumno EUSEBIO CIRILO ALIAGA SANTOS, en los meses de abril y mayo del 2012.

Que, este Instituto mediante Oficio N° 166-2012-DGIESTP."TRT"-S de fecha 26 de junio del 2012, comunica que el alumno EUSEBIO CIRILO ALIAGA SANTOS del área académica de Producción Agropecuaria del V Semestre, concurrió normalmente a sus clases en los meses de abril y mayo del 2012, los días lunes a viernes en el horario de 3 p.m. a 9.05 p.m.

Que, el Gobierno Regional de Junín, a través de la Oficina Regional de Administración y Finanzas, ha remitido a los ex servidores EUSEBIO CIRILO ALIAGA SANTOS y MAX ALEJANDRO BALDEON PEREZ, las Cartas N° 195-2012-GR-JUNIN/ORAF y N° 19-2012-GR-JUNIN/ORAF del 01 de agosto del 2012; mediante las cuales se les requiere la devolución de los montos que como remuneración de los meses de abril y mayo 2012, cobraron indebidamente.


Que, en el caso del Sr. MAX ALEJANDRO BALDEON PEREZ, responde el requerimiento mediante Carta s/n de fecha 13 de agosto del 2012, señalando que nunca suscribió la prórroga a su contrato, que tiene fecha 30 de marzo del 2012 y






que a petición de la impugnante entregó 02 recibos por honorarios profesionales en blanco. Acota que la procesada reconsiderante, lo llamó para avisarle que su cheque de abril del 2012 ya se encontraba listo, por lo que luego de hacerlo efectivo y por indicación de la citada impugnante entregó el dinero al Sr. Goyo Oré Camarena. Con relación al mes de mayo del 2012, señala no haber cobrado monto alguno; por lo que concluye que quien debe devolver los montos objeto de requerimiento es la Sra. Rocio Cotera Barja.

Que, con relación al Sr. EUSEBIO CIRILO ALIAGA SANTOS, igualmente contesta el requerimiento con Carta s/n de fecha 06 de agosto del 2012, manifestando que tampoco suscribió la adenda a su contrato de fecha 30 de marzo del 2012 y que hizo entrega de dos recibos de honorarios profesionales en blanco al Sr. Milquiades Sánchez Inga, administrador de la Sub Gerencia. Posteriormente la impugnante Sra. Rocio Cotera Barja le comunica que el cheque ya se encontraba listo, por lo que se apersonó a la Sub Gerencia, concurriendo con la ayudante de la impugnante Sra. Norma Tolentino Gonzalo al Banco de la Nación donde cobró el cheque y le hizo entrega de la totalidad del dinero a la citada ex Sub Gerente Sra. Rocio Cotera Barja. Con relación al mes de mayo del 2012, señala no haber cobrado monto alguno; por lo que concluye que quien debe devolver los montos objeto de requerimiento es la Sra. Rocio Cotera Barja.



Que, analizando los hechos antes descritos, podemos concluir que, la ex Sub Gerente impugnante y su Administrador ya mencionado; han sostenido reiteradamente que los ex servidores EUSEBIO CIRILO ALIAGA SANTOS y MAX LEJANDRO BALDEON PEREZ; **SÍ HAN CONCURRIDO** a laborar los meses de abril y mayo del 2012. En contraposición, se tiene que el servidor nombrado Ing. Máximo Elescano Bernardo, que menciona dichos ex servidores, **NO HAN CONCURRIDO** a laborar.



Que, al respecto, debe tenerse en cuenta que la Defensoría del Pueblo, efectúa una visita inopinada a la Sub Gerencia Satipo el 07 de junio del 2012, para verificar la presencia de los tantas veces citados servidores y no los ubica en sus puestos de trabajo. Ello genera que la Sub Gerente de Desarrollo Satipo, quien en ese momento se encontraba en la ciudad de Huancayo y había recogido personalmente los cheques de los servidores CAS, correspondiente a las labores del mes de mayo; el día siguiente 08 de junio, al enterarse de la intervención defensorial; devuelve los cheques a la mano, y solicita su anulación.

Que, luego de la constatación de la Defensoría del Pueblo el 07 de junio del 2012, la Sub Gerente ya citada ordena la anulación de los cheques de los servidores, sin motivo alguno, pues debe considerarse que los ambientes de la Sub Gerencia de Desarrollo de Satipo son pequeños y sus servidores no superan la decena; por lo que no tiene explicación lógica que la citada funcionaria ordene la anulación del pago, si tenía la certeza y le constaba que ambos servidores CAS habían prestado sus servicios. Igualmente debe evidenciarse que carece de coherencia que dos servidores cuya inasistencia se ha constatado el día 07 de junio, curiosamente hayan solicitado licencia sin goce de haber el mismo día 31 de mayo del 2012; incluso uno de ellos renunció el 31 de marzo por motivos de





Presidencia



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

inicio de sus clases, pero retorna a laborar en abril, en mérito a una reconsideración.

Que, es necesario establecer con certeza la veracidad de la Asistencia del servidor EUSEBIO CIRILO ALIAGA SANTOS, ya que de sus tarjetas de asistencia personal de los meses de abril y mayo del 2012; así como de las conformidades otorgadas por el encargado de administración de la Sub Gerencia, Sr. Melquíades Sánchez Inga, dicha persona asistió a laborar sin registrar inasistencias; sin embargo, la Gerencia General Regional, con Of. N° 690-2012-GRJ/GGR, solicitó a la Dirección del Instituto Superior Tecnológico Teodoro Rivera Taype de Satipo, comuniqué sobre el record de asistencia del alumno EUSEBIO CIRILO ALIAGA SANTOS; respondiendo esta entidad educativa que **dicho estudiante concurrió a sus clases normalmente los meses de abril y mayo del 2012 en el horario de 3 p.m. a 9.05 p.m., de lunes a viernes de cada semana.**

Que, por ello, queda demostrado que dicho servidor no prestó sus servicios a la entidad, por lo menos en el turno tarde, pues la jornada de trabajo de la entidad es de 2.30 p.m. a 5.30 p.m.

Que, con relación a la determinación de la asistencia a laborar del ex servidor MAX ALEJANDRO BALDEON PEREZ, igualmente obran las tarjetas de asistencia personal y las conformidades para el pago de sus haberes. Adicionalmente, en el Informe N° 026-2011-RC/GRJ/SGDS del 08 de junio del 2012, la Sub Gerente Rocío Cotera Barja comunica al Gerente General Regional que. *"Referente al chofer de la camioneta asignada a esta oficina, debo informar que por coordinaciones realizadas con la Sub Gerencia de Obras, esta fue asignada a la obra "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Satipo", desde fecha 16 de mayo del 2012";* sin embargo y conforme es de verse a la declaración prestada por el Asistente Administrativo de la obra antes detallada, Lic. David Gerardo Santos Alata; **la camioneta asignada a la SGDS, apoyó desde el 16 de mayo y 23 del mismo mes para la realización de trabajos topográficos y luego en el mes de junio del 2012; siendo el chofer el Sr. Silvio Fuchs.** Por ello, siendo la única camioneta asignada a la Sub Gerencia de Desarrollo Satipo, la que se prestó servicios para la obra "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Satipo"; se confirma que el Sr. MAX ALEJANDRO BALDEON PEREZ, no manejaba dicha unidad, en el mes de mayo por lo menos, por lo que se ha faltado a la verdad al afirmar lo contrario.

Que, estando establecida la falsedad del contenido de los documentos que acreditan la asistencia a laborar de los ex servidores EUSEBIO CIRILO ALIAGA SANTOS Y MAX ALEJANDRO BALDEÓN PÉREZ; debe establecerse la responsabilidad de la impugnante en la falta descrita en el inciso h) del art. 28 del D. Leg. N° 276 como: abuso de autoridad, la prevaricación y/o el uso de la función con fines de lucro.






Que, al respecto, se tiene la sindicación directa de los antes mencionados ex servidores, quienes a través de sendas cartas, cursadas a la entidad, respondiendo al requerimiento de devolución de montos indebidamente pagados como honorarios han manifestado de manera uniforme que han entregado dicho dinero personalmente a la ex servidora impugnante, en un caso y en otro a un particular por orden de ésta. Si bien la simple imputación *per se*, no puede enervar la presunción constitucional de inocencia, debe establecerse que se aúna a estas sindicaciones el hecho de haber solicitado la anulación de los cheques del mes de mayo, luego de la visita de la Defensoría del Pueblo a la Sub Gerencia el día 07 de junio del 2012 y sin que exista una razón válida para dicha solicitud, todo ello aunado al hecho acreditado que los ex servidores EUSEBIO CIRILO ALIAGA SANTOS Y MAX ALEJANDRO BALDEÓN PÉREZ, no laboraron los meses de abril y mayo del 2011. Las afirmaciones que hace la impugnante en su escrito de descargo sobre la necesidad de contar con reemplazos para los referidos servidores que habían renunciado y la entrega que se le habría efectuado de los montos que por honorarios cobraban, llevan a la conclusión del pleno conocimiento que tenía la citada impugnante, sobre las ilicitudes que se estaban cometiendo.

#### **Sobre la sanción a aplicarse a una ex servidora.-**


Que, pese a no haber sido objeto de alegación en el recurso de reconsideración, es menester establecer la facultad de la administración pública para imponer sanciones disciplinarias a sus ex servidores, pues en el presente caso estamos frente a la sanción impuesta a una ex servidora designada de la entidad.



Que, el art. 6 del D. Leg. N° 276 establece que para efectos de la Carrera Administrativa y el Sistema Único de Pensiones, la administración pública constituye una sola institución. Por ello, pese a que el Estado se ha organizado a través de diversas entidades para el cumplimiento de sus fines, éste debe ser conceptuado para los efectos disciplinarios y el régimen del D. Leg. N° 276; como un único empleador.

Que, este criterio ha sido adoptado por el Tribunal Constitucional, pues así lo señala en el fundamento 21 de la sentencia recaída en el exp. N° 206-2005-PA/TC que establece textualmente:

*"Con relación a los trabajadores sujetos al régimen laboral público, se debe considerar que el Estado es el único empleador en las entidades de la Administración Pública"*



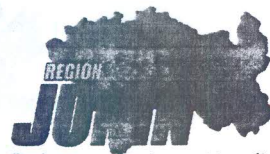
Que, en consecuencia y estando establecida la naturaleza de único empleador del Estado, debe evidenciarse su potestad sancionatoria, dentro del régimen del D. Leg. N° 276, incluso luego de haber concluido el vínculo laboral con el Trabajador, como lo establece de manera taxativa el art. 174 del D. S. N° 005-90-PCM, que señala:

*"El servidor cesante podrá ser sometido a proceso administrativo por las faltas de carácter disciplinario que hubiese cometido en el ejercicio de sus funciones dentro de los términos señalados en el artículo anterior"*





Presidencia



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

Que, por ello y estando a la condición del Estado como único empleador, así como la facultad del mismo para imponer sanciones disciplinarias a sus ex servidores; debe afirmarse que las sanciones impuestas, pueden hacerse efectiva en otra entidad en la que el servidor sancionado preste sus servicios posteriormente, siempre que sean del mismo régimen laboral. Estas consideraciones se encuentran plasmadas en el Informe Legal N°223-2010-SERVIR/GG-OAJ de fecha 09 de agosto del 2010, de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR, que es el ente rector del Sistema Administrativo de Recursos Humanos.

Por los fundamentos expuestos y contando con el visado de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Junín:

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el literal d) del Artículo 21° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y sus modificatorias;

#### SE RESUELVE:



**ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO** el recurso impugnatorio de reconsideración interpuesto por la ex Sub Gerente de Desarrollo de Satipo, Sra. Maritza Rocio Cotera Barja, contra la Resolución Directoral Administrativa N° 774-2012-GR-JUNIN/ORAF, de fecha 28 de diciembre del 2012, por la que se le impone la medida disciplinaria de suspensión sin goce de remuneraciones por 30 días; Dándose por Agotada la Vía Administrativa.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCÁRGUESE** a la Sub Dirección de Recursos Humanos de la entidad, comunique de la presente sanción a la entidad pública en la que pudiera estar prestando sus servicios la ex Sub Gerente de Desarrollo de Satipo, Sra. Maritza Rocio Cotera Barja, para lo cual deberá hacer la correspondiente búsqueda en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público a cargo de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas

**ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR** copia de la presente resolución a la interesada, Dirección Regional de Administración y Finanzas, y demás órganos competentes del Gobierno Regional de Junín.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



Dr. VLADIMIR ROY CERRÓN ROJAS  
PRESIDENTE  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y demás fines.

Hyo.

14 FEB. 2013

Lic. Angela Arias Huatuco  
DIRECTORA REGIONAL DE COMUNICACIONES